EXPEDIENTE :	AA 587-13
CASO:	Referidas autoridades violentan el derecho a la salud ,no garantizan a los miembros de la sociedad en su conjunto, el goce de sus derechos a la salud y a la vida, los cuales, están en amenaza constante
RECURSO:	Amparo Administrativo
PROCEDENCIA:	Sala Constitucional
RECORRENTE:	Ministerio Publico
RECURRIDO:	Contra actuaciones de las Secretarias de Estado en los Despachos de Salud Pública y Finanzas
RESOLUCION:	Otorgado
FECHA DE FALLO:	Uno de abril del dos mil catorce

C E R T I F I C A C I O N

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia **CERTIFICA:** La sentencia que literalmente dice: "**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-** Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, uno de Abril del año dos mil catorce. **VISTO:** Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado **EDY ALEXANDER TABORA GONZALES** a favor de **LOS INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS**, contra actuaciones de las Secretarias de Estado en los Despachos de Salud Pública y Finanzas respectivamente, por considerar el recurrente, que las referidas autoridades no garantizan a los miembros de la sociedad en su conjunto, el goce de sus derechos a la salud y a la vida, los cuales, están en amenaza constante, derechos que son consagrados en la Constitución de la República, la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, el Código de Salud y el Código de la Niñez; con relación al

desabastecimiento de medicamentos, cupos para pacientes, personal insuficiente, infraestructura inadecuada, inaplicación de tratamiento médico y falta de insumo de los principales hospitales del país, como ser **HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS DE SAN PEDRO SULA, CORTES; HOSPITAL REGIONAL DE ATLANTIDA, LA CEIBA, ATLANTIDA; HOSPITAL SAN FELIPE Y EL HOSPITAL ESCUELA, AMBOS DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN.**

Estima el recurrente como violentados el derecho a la salud establecido en el artículo 145 de la Constitución de la República en relación con los artículos 1, 8 y 9 del Código de Salud, 2 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 24 numeral 1 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, y el derecho a la vida establecido en los artículos 65 de la Constitución de la República y 4 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. **ANTECEDENTES.** 1) Que en fecha treinta y uno (31) de julio del año dos mil trece (2013), compareció ante esta Sala, el Abogado **EDY ALEXANDER TABORA GONZALES** interponiendo recurso de amparo a favor de **LOS INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS,** contra actuaciones realizadas por la Secretaria de Estado en los Despachos de Salud Pública y Finanzas respectivamente, por considerar el recurrente que las referidas autoridades no garantizan a los miembros de la sociedad en su conjunto, el goce de sus derechos a la salud y a la vida, los cuales, están en amenaza constante, derechos que son consagrados en la Constitución de la República, la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y

Culturales, el Código de Salud y el Código de la Niñez; con relación al desabastecimiento de medicamentos, cupos para pacientes, personal insuficiente, infraestructura inadecuada, inaplicación de tratamiento médico y falta de insumo de los principales hospitales del país, como ser **HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS DE SAN PEDRO SULA, CORTES; HOSPITAL REGIONAL DE ATLANTIDA, LA CEIBA, ATLANTIDA; HOSPITAL SAN FELIPE Y EL HOSPITAL ESCUELA AMBOS DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN.** 2) Que en fecha seis (6) de agosto del año dos mil trece (2013), este alto Tribunal, admitió el recurso de amparo interpuesto y ordenó librar comunicación a la Secretaria de Estado en los Despachos de Salud Pública, a fin de que emitiera un informe circunstanciado sobre lo expuesto por el recurrente. **(Folio 228 de la pieza de amparo).** 3) Que en fecha quince (15) de agosto del año dos mil trece (2013), esta Sala, tuvo por recibida la comunicación debidamente cumplimentada junto con el informe emitido por el Abogado **RICARDO ALFREDO MONTES** en su condición de Secretario General de la Secretaria de Salud. **(Folio 232 al 235 de la pieza de amparo).** 4) Que en fecha siete (7) de octubre del año dos mil trece (2013), esta Sala, vista la solicitud de medidas cautelares presentada por el Abogado Edy Alexander Tabora Gonzáles, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, ordenó (sic) "a la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, que tome todas las acciones y medidas que sean necesarias para: 1) Hacer accesible a los pacientes de TODOS los hospitales, clínicas y/o centros de salud públicos del país los medicamentos que sean necesarios para sus respectivos tratamientos; 2) Proporcionar servicio de diálisis a toda persona que así lo

requiera en los distintos hospitales, clínicas y/o centros de salud del país; 3) Informar a esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre las acciones que sean tomadas en resguardo de los derechos de la población del Estado de Honduras, reconocidos *inter alia* por la Constitución de la República; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y la Convención Americana de Derechos Humanos.”; y ordenó dar vista al recurrente por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que formalizara su petición por escrito. **(Folio 238 de la pieza de amparo)**. 5) Que en fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil trece (2013), compareció ante esta Sala, el Abogado **EDY ALEXANDER TABORA GONZALES**, formalizando recurso de amparo a favor de **LOS INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS**, contra actuaciones de las Secretarías de Estado en los Despachos de Salud Pública y Finanzas respectivamente, por considerar el recurrente, que las referidas autoridades no garantizan a los miembros de la sociedad en su conjunto, el goce de sus derechos a la salud y a la vida, los cuales, están en amenaza constante, derechos que son consagrados en la Constitución de la República, la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, el Código de Salud y el Código de la Niñez; con relación al desabastecimiento de medicamentos, cupos para pacientes, personal insuficiente, infraestructura inadecuada, inaplicación de tratamiento médico y falta de insumo de los principales hospitales del país, como ser **HOSPITAL MARIO**

CATARINO RIVAS DE SAN PEDRO SULA, CORTES; HOSPITAL REGIONAL DE ATLANTIDA, LA CEIBA, ATLANTIDA; HOSPITAL SAN FELIPE Y EL HOSPITAL ESCUELA AMBOS DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN; lo que a criterio del recurrente violenta el derecho a la salud establecido en el artículo 145 de la Constitución de la República en relación con los artículos 1, 8 y 9 del Código de Salud, 2 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 24 numeral 1 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, y el derecho a la vida establecido en los artículos 65 de la Constitución de la República y 4 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, omitiéndose la vista al Fiscal del Despacho de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. **(Folio 242 al 259 y 263 de la pieza de amparo).** **CONSIDERANDO (1):** Que la Ley Sobre Justicia Constitucional en el artículo 41 manda que toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo. La misma Ley en el artículo 44 establece que la acción de amparo, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, por la persona agraviada o por cualquiera civilmente capaz en nombre de ésta, sin necesidad de poder. **CONSIDERANDO (2):** Que el Artículo 1 de la Ley del Ministerio Público, establece la naturaleza jurídica de esa institución y señala que: "El Ministerio Público es un organismo con rango constitucional, profesional, especializado, **responsable de la representación, defensa y protección de los intereses de la sociedad,** con autonomía presupuestaria y administrativa e independencia funcional de

los poderes del Estado y libre de toda injerencia política partidaria. En el artículo 2 manda que: "... El Ministerio Público dirigirá toda su atención y esfuerzo a la ejecución del mandato constitucional, mediante las siguientes acciones:

1. **Representación, defensa y protección de los intereses de la sociedad facilitando los mecanismos jurídicos de accesibilidad de la justicia.**" De tal manera que, de acuerdo

a la normativa transcrita, el Ministerio Público está legitimado por ley para interponer acciones legales en defensa de los derechos de la sociedad, como ocurre en el presente caso. En ese sentido, el Artículo 80 constitucional manda que "Toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal." **CONSIDERANDO (3)**: Que se debe mencionar que para nuestro derecho público, en materia de garantías, una de las principales novedades, fue la incorporada por la reforma constitucional, y sin lugar a dudas es el amparo colectivo, que como quedó dicho en el artículo 43 de la Ley sobre Justicia Constitucional establece al respecto que: "La acción de amparo podrá interponerse aun cuando el hecho, o acto violatorio de los derechos no conste por escrito". Lo anterior en una de las reformas fundamentales que se obtuvo del paso de la Ley de Amparo de 1906 a la Ley sobre Justicia Constitucional y se trata de una ampliación del amparo individual o clásico. Es una extensión de los derechos afectados o restringidos, no solamente emitidos a través de resoluciones, sentencias interlocutorias, etc., sino que se amplía a hechos o actos

realizados o dejados de realizar por la administración pública, empresa privada o cualquier persona, respetando la amplitud que siempre se ha tenido en relación a los sujetos legitimados para su interposición. En ese sentido, la representación del Ministerio Público, manifiesta que la acción constitucional de amparo se interpone en contra del desabastecimiento de medicamentos, cupos para pacientes, personal médico y de enfermería insuficiente, infraestructura hospitalaria inadecuada, inaplicación de tratamientos médico y falta de insumos en los principales hospitales del país, como ser **HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS DE SAN PEDRO SULA, CORTES; HOSPITAL REGIONAL DE ATLANTIDA, LA CEIBA, ATLANTIDA; HOSPITAL SAN FELIPE Y EL HOSPITAL ESCUELA, AMBOS DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN.** **CONSIDERANDO (4)**: Que expone el recurrente que cada una de las acciones u omisiones protagonizadas por las Secretarías de Estado en los Despachos de Salud y Finanzas, en detrimento de los habitantes de la República de Honduras, vulneran los artículos 145 y 65 de la Constitución de la República, disposiciones que regulan respectivamente, la obligación del Estado a proteger la Salud, y el derecho a la vida, en relación con los artículos 4 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 1, 8 y 9 del Código de Salud, artículos 2 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 24 numeral 1 de la Convención Sobre los Derechos del Niño. Manifiesta el impetrante que la vulneración consiste en la carestía ya apuntada, denunciada diariamente por los medios de comunicación escrita, hablada y televisada, en perjuicio de

los habitantes del país. **CONSIDERANDO (5)**: Que el Artículo 59 de la Constitución de la Republica señala: "La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable." El Artículo 65 de la Ley principal dispone "El derecho a la vida es inviolable." **CONSIDERANDO (6)**: Que el Estado de Honduras en el Artículo 145 reformado por Decreto 270-2011 de fecha 19 de enero de 2012 y publicado en el Diario oficial La Gaceta No. 32, 753 de fecha 21 de febrero de 2012, señala: "**Se reconoce el derecho a la protección de la salud.** Es deber de todos participar en la promoción y preservación de la salud personal y de la comunidad. El Estado conservará el medio adecuado para proteger la salud de las personas. En consecuencia declárase el acceso al agua y saneamiento como un derecho humano; cuyo aprovechamiento y uso será equitativo preferentemente para consumo humano. Asimismo se garantiza la preservación de las fuentes de agua a fin que éstas no pongan en riesgo la vida y salud públicas. Las Actividades del Estado y de las entidades públicas y privadas se sujetarán a esta disposición. La Ley regulará esta materia. El subrayado es nuestro. **CONSIDERANDO (7)**: Que según lo dispone la norma antes transrita, es menester del Estado conservar un medio ambiente adecuado para proteger la salud de las personas, así como es deber de todos participar en la promoción y preservación de la salud personal y de la comunidad, se debe mencionar que en nuestra Constitución el derecho a la salud no se encuentra contemplado entre los derechos fundamentales establecidos en el capítulo II del Título III de los derechos individuales,

sino que se le reconoce en el capítulo IV, que refieren los derechos sociales contenidos en los artículos del 145 al 150.

CONSIDERANDO (8): Que es imposible el análisis del derecho a la salud de manera individual, pues una vez que éste se ve afectado, compromete otros derechos fundamentales como el derecho a la vida (artículo 65 CH), a la integridad física, psíquica y moral (68 CH), y el principio de dignidad humana (artículo 59 CH). Es esta unidad intrínseca la que hace que el derecho a la salud adquiera carácter de derecho fundamental, y por tanto esa dimensión constitucional hace que su afectación merezca protección por la vía constitucional de la acción de amparo. En conclusión, la Sala manifiesta que las garantías individuales no solo existen por el solo hecho de estar consagradas en la Constitución, en instrumentos internacionales ó en las leyes reglamentarias; sino que basta con que se torne en una situación intrínseca al ser humano, y que por esta razón, en caso de haber alguna vulneración u ocasione un grave perjuicio, no obstante lo anterior, para poder aplicar un procedimiento coercitivo, dicha vulneración debe constar previamente en un cuerpo legal. **CONSIDERANDO (9)**: Que se entiende por SALUD el funcionamiento armónico del organismo tanto del aspecto físico como psicológico del ser humano. Lo constituye además el acceso a condiciones mínimas de salubridad a fin de vivir una vida digna. Es por ello que la normativa señalada obliga al Estado a proporcionar un medio ambiente adecuado (art.145 CH), o proporcionar las condiciones ambientales adecuadas, tales como atención de salud oportuna y apropiada, nutrición, vivienda, agua potable, de ello se desprende que el derecho a

la salud debe ser abordado en tres perspectivas: **1.-** el derecho a la salud de cada persona en particular, **2.-** el derecho a la salud familiar y **3.-** el derecho a la salud comunitaria. **CONSIDERANDO (10)**: Que para abordar el derecho a la salud desde las tres perspectivas apuntadas, la Sala de lo Constitucional manifiesta, y sin intención de indicar que se trata de un listado *numerus clausus*, que constituyen derechos e intereses de incidencia colectiva los relacionados con: La salud pública; la protección de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano; la protección del patrimonio público y del cultural; la correcta comercialización de mercaderías (alimentos); la competencia leal; el control de monopolios; la publicidad e información veraz y suficiente; el acceso a los servicios públicos y a una prestación uniforme, eficiente y oportuna; la defensa del usuario y del consumidor, en tanto no se trate de situaciones exclusivamente referidas al o a los sujetos reclamantes. La protección contra hechos, actos u omisiones que tengan por objeto o por resultado la discriminación, basados entre otros, en motivos tales como raza, color, etnia, linaje, origen o condición social, nacionalidad, nacimiento, religión, idioma, estado civil, ideología, opinión política o gremial, género, edad, posición económica, discapacidad, características genéticas, **salud**, caracteres físicos, ocupación laboral, antecedentes penales u orientación, identidad o preferencia sexual; el acceso a la información pública; entre otros. **CONSIDERANDO (11)**: Que el derecho a la Salud como derecho fundamental, efectivamente está establecido en una ley secundaria, en el Decreto No. 65-91 de

fecha 28 de mayo de 1991, contenido del Código de la Salud que en su artículo 1 establece: "La salud considerada como un estado de bienestar integral, biológico, psicológico, social y ecológico es un derecho humano inalienable y corresponde al Estado, así como a todas las personas naturales o jurídicas, el fomento de su protección, recuperación y rehabilitación.". El artículo 6 señala que: "El presente Código y las normas de salud en general, se aplicarán en consecuencia con los convenios y tratados internacionales que sobre salud sean suscritos por el Estado de Honduras." Así, el artículo 25 del Código de la Salud establece que: "..Para efectos de la aplicación de este Código y de las demás normas de salud, se entenderá por medio ambiente, el conjunto de recursos naturales cuya preservación y renovación a cargo del Estado y de todos los habitantes, se hacen necesarios para asegurar la salud y el bienestar general." Dispone el artículo 26 dispone: "Para los efectos de usos se establece la siguiente clasificación del agua: a) Para consumo humano; b) Para uso doméstico; c) Para la preservación de la flora y de la fauna; d) Para uso agrícola y pecuario; y, e) Para uso industrial."

CONSIDERANDO (12): Que siguiendo la misma normativa, el artículo 135 del Código de Salud dispone que: "Se declara como política del Estado: a) Asegurar el suministro adecuado de medicamentos de calidad óptima al precio más bajo posible; b) Enfatizar las bases científicas para el uso de medicamentos con el objeto de obtener la mejor efectividad terapéutica al menor costo posible; c) Promover la seguridad terapéutica el uso de presentaciones farmacéuticas más de un principio activo; ch) Promover e incentivar el uso de

terminología genérica en la importación, fabricación, distribución, comercialización, propaganda y promoción, receta y entrega de medicamentos; y d) Promover la producción nacional, tanto para el consumo interno como para exportación, a través de la inversión de fondos nacionales y externos, estableciendo mecanismos que no perjudiquen la capacidad ya existente. **CONSIDERANDO (13)**: Que La Organización de Naciones Unidas (ONU) a través de la Organización Mundial de la Salud, establece que *"la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social (...) considerada como una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad."* Así mismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, dispone que *"toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, **la salud** y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, **la asistencia médica y los servicios sociales necesarios** (...)."* **CONSIDERANDO (14)**: Que el artículo 136 del Código de Salud señala que "Se entenderá por producto farmacéutico, cualquier sustancia natural o sintética o mezcla de ellas, que se destine a la administración del ser humano, con fines de curación, atenuación, tratamiento, prevención o diagnóstico de las enfermedades o sus síntomas asociados." **CONSIDERANDO (15)**: Que como es visto, nuestro sistema jurídico de salud, en su aspecto normativo está conformado por la Constitución, Los

Convenios Internacionales de que Honduras forma parte, el Código de Salud, Ley Hondureña de Seguridad Social y los Decretos reglamentarios de la misma, considerando esta Sala que Honduras cuenta con una legislación meticulosa, que conforma el Sistema de Seguridad Social en Salud.

CONSIDERANDO (16): Que una vez determinada la legitimación activa del Ministerio Público que lo faculta para la interposición de la acción de amparo a favor de la sociedad; así como analizada la normativa nacional e internacional que rige la materia y que determina la obligación de las entidades estatales a proporcionar a los habitantes de Honduras, el acceso a la salud, mediante el cubrimiento de una atención integral en salud, la Sala de lo Constitucional estima que la salud, además de ser un derecho fundamental, también tiene la connotación de un servicio público, precisando que todas las personas deben acceder a él, y que al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestación atendiendo los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad; ello también porque es una extensión directa del derecho del fundamental primario a la vida, así como al derecho a la dignidad. **CONSIDERANDO**

(18): Que del estamento legal aludido esta Sala concluye que la salud es una condición existencial de la vida humana en condiciones de respeto a dignidad del hombre y de la mujer, pues al hombre y a la mujer, niños y niñas ancianos y ancianas no se le debe una vida cualquiera, sino una vida saludable, esto es así pues la persona humana requiere niveles adecuados de existencia, en todo tiempo y en todo lugar, y no debe existir excusa alguna para que a un ser

humano no se le reconozca su derecho inalienable a la salud.

CONSIDERANDO (19): Que la negativa de las entidades de salud en suministrar tratamientos, dispositivos, aparatos, medicamento y otros, para prevenir, curar, rehabilitar o proporcionar una mejor calidad de vida en aquellos casos en que la prevención, curación o rehabilitación hayan fracasado, constituye una vulneración directa al derecho a la salud, al derecho fundamental a la dignidad del ser humano y sobre todo al derecho fundamental a la vida, todos estos consagrados en la Constitución de la República, en instrumentos internacionales y en las leyes secundarias. La Sala manifiesta entonces, que tanto la omisión como la acción cometida por los administradores del Estado encargados de proporcionar Salud a los habitantes de la República, linda con la vulneración o no de derechos fundamentales de la sociedad, por lo que las entidades estatales que tienen esta responsabilidad, deben, en principio, ejercitar las acciones precisas, eficaces y eficientes, para estar al frente de una acción preventiva que se adelante al acaecimiento de hechos que produzcan daños a la Salud física y mental de la población para evitarlos, y en caso de haberlos, proporcionar los tratamientos, medicamentos y la facilidad de acceso y realización de todo tipo de exámenes médicos y otros, garantizando así el respeto de los derechos fundamentales supramencionados, a todos los integrantes de la sociedad. Es así como la Sala de lo Constitucional, en aplicación del derecho constitucional va dando respuesta a una altísima gama de intereses generales, públicos, que requieren de una protección de marcado carácter preventivo y en caso de no

lograrse en su totalidad, de carácter curativo o de rehabilitación, y proporcionar mejor calidad de vida en caso de enfermedades terminales. Se debe tener en cuenta que la salud es concebida actualmente como uno de los pilares necesarios para la construcción del ideal de una sociedad con seres humanos dignos. **CONSIDERANDO (20):** Que es evidente el sufrimiento humano de un considerable número de ciudadanos que acuden a los hospitales públicos en busca de que se haga efectivo este derecho humano garantizado en nuestra Constitución, en los instrumentos internacionales de los cuales Honduras es signataria y en las leyes secundarias, sufrimiento que es denunciado a diario por los medios de comunicación hablados, escritos y televisados. **CONSIDERANDO (21):** Que con esta acción presentada por el Ministerio Público, comienza una cultura de petición de tutela de órdenes o sentencias de jueces de la República que obliguen a las entidades prestadoras de servicios públicos de salud de nuestro país a brindar todo tipo de prestación sanitaria, que es tan deficiente y por tanto vulnera la dignidad de los ciudadanos, ya que toda persona que padece una enfermedad se coloca en un estado de manifiesta debilidad y vulnerabilidad, siendo obligación del Estado garantizarle, tal y como lo dice el Código de Salud en su "**Artículo 1.-** La Salud considerada como un estado de bienestar integral, biológico, psicológico, social y ecológico **es un derecho humano inalienable y corresponde al Estado,** así como a todas las personas naturales o jurídicas, **el fomento de su protección, recuperación y rehabilitación.** **CONSIDERANDO (22):** Que así las cosas, y habiendo dicho que en nuestra Constitución no esta

contemplado el derecho a la salud como derecho fundamental, sino que se le reconoce en el capítulo de los derechos sociales, a que se refieren los artículos del 145 al 150 de la Carta Magna, esta Sala determina que cuando la vulneración del derecho a la salud compromete otros derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la integridad física, al derecho a la dignidad humana, tal derecho se eleva y adquiere jerarquía de derecho fundamental y por tanto merece su protección por esta vía; y habiéndose acreditado la vulneración a tal derecho fundamental a la salud, es procedente otorgar el amparo interpuesto. **CONSIDERANDO (23):**

Que el artículo 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece los requisitos de una sentencia y manda que la sentencia que otorgue el amparo contendrá en su parte dispositiva: 1...2... "3.- La determinación precisa de la conducta a cumplir con las especificaciones necesarias para su debida ejecución", en ese sentido para que se restituya el derecho de las personas a que se les garantice el derecho a la salud, el Estado debe, a través de las secretarías correspondientes ejecutar las siguientes acciones: En principio, que la Secretaría de Finanzas proporcione a la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud una Financiación sostenible y oportuna para: **1.-** Que el Estado promueva políticas, planes y programas funcionales que garanticen el derecho a acceder a servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad, **2.-** Que los Hospitales Públicos del País donde se proporcionan cualquier tipo de tratamientos permanentes, verbigracia (diálisis), mantengan todos los insumos y los aparatos en optimas condiciones para

brindarlos de manera efectiva y oportuna, y aquellos que no, que el Estado proceda a cubrir sus obligaciones o a exigir que se cumplan las obligaciones con él no cumplidas, a aquellos con quienes han firmado contrato para este efecto.

3.- Que las instituciones encargadas de la prestación del servicio de salud, cumplan de manera progresiva y cada vez más fortalecida con brindar mejores niveles de vida a las personas que integran el grupo vulnerable que requiera de la prevención, protección, curación o rehabilitación de cualquier tipo; **4.-** Denunciar y ejercer las acciones correspondientes ante la noticia de que se están ejerciendo actos de corrupción con los medicamentos, aparatos médicos, contrataciones de personal, contratos de suministros en general, encaminados a reducir redefinir o desviar los fondos designados para garantizar el derecho a la salud, y lograr que se castiguen a los responsables. **POR TANTO:** La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por **UNANIMIDAD** de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 65, 69, 80, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 322, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 8, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 2 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 18, 24, y 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No.2,

Certificación de la Sentencia recaída en el AA 587-2013 en fecha 01 de Abril de 2014.

4, 5, 7, 9 No.2, 41, 63, 72 y 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 8 y 9, del Código de Salud; **FALLA:** **OTORGANDO** la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito, y consecuentemente que se cumpla con lo dispuesto en el considerando 23 que precede; **Y MANDA:** Que con certificación de esta Sentencia el Ministerio Público, ejerza las acciones correspondientes, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado **LIZARDO CARRANZA**. **NOTIFIQUESE**. Firmas y Sello. **SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA; PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA; GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA.** Firma y Sello. **CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL"**.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el veinte de mayo de dos mil catorce, certificación de la sentencia de fecha uno de abril de dos mil catorce, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo No. 587-2013.

**CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL**